

Galicia espera

Juan Ferreiro Galguera, Profesor titular de Derecho de la Universidad de La Coruña (23/06/05)

LA jornada electoral celebrada el pasado domingo en Galicia ha sido una de las más emocionantes de la historia de la democracia española, tanto por lo estrecho del resultado como por lo dilatado del suspense.

Los días previos, la duda que flotaba sobre la opinión pública, y que no lograban disipar las encuestas, era si el Partido Popular, dirigido por el octogenario Manuel Fraga, sería capaz de revalidar por cuarta vez consecutiva la mayoría absoluta o si, por el contrario, el Partido Socialista de Galicia, liderado por Emilio Pérez Touriño, y el Bloque Nacionalista Galego, de Anxo Quintana, podrían gobernar en coalición.

Aunque todos los sondeos realizados a pie de urna pronosticaban una significativa merma de votos y de escaños en las filas populares, tras un escrutinio de infarto, la jornada concluyó con un resultado tan apurado como incierto: a falta del recuento de las papeletas de los emigrantes, que concluirá el próximo lunes 27, el PP se quedaba a un escaño de los 38 necesarios para continuar gobernando en solitario.

El obligado compás de espera previo al veredicto de las urnas ofrece, si no el sosiego necesario, sí el tiempo preciso para poder extraer algunas reflexiones de esta curiosa, aunque no por ello inesperada, encrucijada electoral.

Lo primero que llamó la atención fueron las tempranas exégesis que hicieron los representantes de socialistas y populares. Aunque faltaba por escrutar el voto emigrante, que en el plebiscito de 2001 había sido muy favorable a Fraga, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, daba por seguro que Touriño sería el próximo presidente de la Xunta. De la misma forma, aunque era obvio que el PSOE había subido en escaños y en votos y el PP había reducido su anterior registro, el secretario general popular, Ángel Acebes, proclamó la «gran victoria del PP y el gran fracaso para Zapatero».

Más que análisis de cierto rigor, ambas declaraciones evidenciaban una cierta ansiedad por desviar la mirada de los comicios gallegos y extrapolar inopinadamente sus cifras al ámbito nacional. Es curioso que no reparasen en que, estando ya la suerte echada, lo más razonable hubiera sido haber optado por un sencillo ejercicio de discreción y de prudencia, sobre el que no pendería la amenaza de ser corregido por el veredicto final.

Aunque el fin principal de toda elección democrática es implicar al pueblo en la elección de sus gobernantes, sirve también para medir las fuerzas de los agentes electorales: ciudadanos y partidos políticos. La cifra que mejor calibra el grado de implicación ciudadana en los comicios es sin duda la de la participación. Con un meritorio 68,1 por ciento (la tasa más elevada de las siete elecciones autonómicas celebradas desde 1981), los ciudadanos gallegos alcanzaron un loable registro, superando en casi cuatro puntos el obtenido en los comicios del 2001.

El plebiscito del 19-J también sirvió para tantear la musculatura de las formaciones políticas, si bien los resultados varían en función de los parámetros de medición. Si la valoración se hace desde el criterio del número de votos, es incontestable que el Partido Popular, con casi el 45 por ciento de sufragios, batió a sus contrincantes: el PSOE obtuvo el 32,5 por ciento, y el BNG el 19,6 por ciento. Pero, si se hace en términos comparativos respecto a las pasadas elecciones, es indudable que los populares

experimentaron una reducción de votos (41.000) y una pérdida de cuatro escaños. La misma que experimentó la formación de Anxo Quintana, que obtuvo 39.000 sufragios menos. Aunque Manuel Fraga puede sentirse satisfecho por haber logrado, a pesar de los inevitables desgastes del poder y del tiempo, el voto de casi la mitad de la población gallega, no es difícil aventurar que, más temprano que tarde, los populares gallegos están abocados a la renovación.

Por su parte, Anxo Quintana, a pesar de haberse esforzado en la campaña por transmitir un mensaje de nacionalismo moderado, no logró alcanzar las cotas logradas por Xosé Manuel Beiras. Al margen de las tensiones en el interior del partido entre la facción más radical y el ala moderada, la lectura a pie de calle es obvia: el mensaje nacionalista apenas arraiga en la cuarta parte de los gallegos. La única formación con representación parlamentaria que experimentó un ascenso de votos y escaños ha sido el PSOE (190.000 votos y ocho diputados más). Aunque aún es pronto para hablar de victoria.

Como hemos apuntado, la finalidad principal de los comicios es decidir quiénes van a gobernar. La victoria más relevante no es por tanto la de los votos, sino la de los escaños. Al margen del debate sobre la mayor o menor idoneidad del sistema electoral español, la ley D'Hondt es la norma aplicable y, por tanto, la que ha de traducir los resultados en términos de gobernabilidad. Asimismo, por paradójico que resulte que se admita el voto de los emigrantes (cuestionado no sólo por su falta de raigambre con la tierra, sino por las escasas garantías democráticas que ofrecen), la ley ha de aplicarse, sin perjuicio de que puedan impugnarse las posibles irregularidades que se puedan cometer. Pero mientras el Parlamento no derogue o modifique la norma, los emigrantes podrán votar y por tanto decidir.

El lunes resolverán la incertidumbre sobre quién va a gobernar. Pero no la del cómo. Gane quien gane, el gobierno que salga de las urnas será frágil y tendrá ante sí el difícil reto de sortear las enormes dificultades que pueda plantear un descuido o un desmán de tan sólo un diputado. Tanto el PP como el PSOE necesitarían un sólido apoyo parlamentario del que carecen. La sombra de los barones, de los coaligados o de los tráfugas planeará sobre el hemiciclo. Esperemos que no sea lo bastante alargada.